

América Latina y el Caribe: **Gobernanza Efectiva, más allá de la recuperación**



Aviso Legal:

América Latina y el Caribe: Gobernanza Efectiva, más allá de la recuperación.
Enero 2021

El PNUD forja alianzas con todos los niveles de la sociedad para ayudar a construir naciones que puedan resistir las crisis; promueve y sostiene un tipo de crecimiento que mejora la calidad de vida de todos. Presentes sobre el terreno en unos 170 países y territorios, ofrecemos una perspectiva global y un conocimiento local al servicio de las personas y las naciones.

Copyright © PNUD 2021 Todos los derechos reservados.

Producido en EE.UU. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo | One United Nations Plaza, Nueva York, NY 10017, Estados Unidos

Diseño Editorial: Sandra Pérez V.

Los puntos de vista, las designaciones y las recomendaciones presentadas en este informe no reflejan necesariamente la postura oficial del PNUD.

Antecedentes y objetivo

El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), como red mundial de las Naciones Unidas para el desarrollo en su compromiso con la región de América Latina y el Caribe, reconoce los nuevos retos para la región producto de la crisis de la COVID-19. Para ello, actualiza su oferta programática regional de gobernabilidad y gobernanza con miras a lograr la implementación de la Agenda 2030.

América Latina y el Caribe sigue estando fuertemente golpeada por la COVID-19. Si bien el mundo termina el 2020 con más de 78 millones de casos y más de 1.8 millones de muertes, la región de ALC representa el 20% del total de casos y el 30% del total de muertes en el mundo. Una representación desproporcionada considerando que los países de ALC son menos del 9% de la población mundial.

A este nivel de impacto se añaden las consecuencias derivadas de la pandemia en los ámbitos económicos, sociales y políticos. Estas consecuencias se refieren a condiciones pre-existentes en la región, incluyendo baja confianza en las instituciones, polarización política y social, percepción de captura del Estado y mecanismos de representación política debilitados. El bajo crecimiento económico de la región se agrava con altas desigualdades y debilidad fiscal. Es decir, la COVID-19 va más allá de una crisis de salud y se debe entender como una crisis de gobernanza por su carácter sistémico.

Luego de una serie de siete consultas con una diversidad de actores de la región realizadas entre septiembre y noviembre 2020, se pudo concluir que la magnitud de la crisis de gobernanza requiere reconocer que es una crisis sin precedentes. De las consultas se desprende que se requieren soluciones innovadoras y que para lograr los cambios requeridos se necesita actuar de manera diferente.

De las consultas se reconoce que partimos de la redefinición del contrato social, entendido como la búsqueda de nuevos acuerdos políticos y sociales que puedan garantizar la prosperidad económica, la paz y la cohesión social. Las instituciones multilaterales deben acompañar estos acuerdos para permitir la construcción del nuevo contrato social.

A partir del planteamiento del PNUD que el desarrollo para América Latina y el Caribe es una carretera de tres carriles – productividad, inclusión y resiliencia – con gobernabilidad efectiva como el pavimento necesario, se proponen los siguientes ocho principios recogidos durante las consultas. Estos principios orientadores buscan promover la discusión de acuerdo con las realidades nacionales. Se parte de la premisa que es impostergable la implementación de estas transformaciones.

A fin de cambiar la dinámica de bajo crecimiento, alta desigualdad y alta vulnerabilidad, se proponen para América Latina y el Caribe, estos principios de gobernabilidad efectiva para orientar la construcción de una normalidad que no solamente es nueva, sino también mejor. Estos principios no son exhaustivos, sino un punto de partida para la necesaria conversación sobre la recuperación sostenible y orientados a lograr la implementación de la Agenda 2030 en esta década.

Principios prioritarios para la recuperación sostenible



1. Políticas fiscales que permitan un gasto sostenible, incluyente y amigable al crecimiento económico

Se transforman los regímenes fiscales para garantizar recaudos que fortalezcan la capacidad del Estado de proveer servicios públicos de calidad, permitiendo un gasto sostenible, más justo e inclusivo, que promueva la universalidad de la protección social y que sea amigable al crecimiento económico.



2. Transformación de las capacidades de los Estados con innovación

Objetivos, reglas y estructuras se adecúan a las expectativas ciudadanas para garantizar la prestación de servicios públicos eficientes y efectivos. Los resultados obtenidos son coherentes con los acuerdos forjados entre diversos actores. La experimentación constante se establece como necesaria en la búsqueda permanente de innovación para mejores resultados.



3. Transparencia, publicidad de información y rendición de cuentas en la gestión pública

La información que concierne a la gestión pública es abierta, accesible y oportuna. Las decisiones e implementación de los quehaceres del Estado son accesibles a la ciudadanía. Tomadores de decisión, a todos los niveles y de todos los sectores, toman responsabilidad por sus acciones.



4. Reconstrucción de la confianza y legitimidad en los actores políticos, económicos y sociales

Se aplican medidas para la reconstrucción de la confianza en los actores políticos, económicos y sociales, hoy claramente disminuida. Se deben construir dinámicas de legitimidad vía procesos de decisión abiertos, acuerdos renovados y resultados efectivos, cambiando la forma en que la ciudadanía “experimenta” su relación con el Estado.



5. La ciudadanía como parte activa en la construcción de acuerdos

La ciudadanía es parte activa de la búsqueda permanente de acuerdos en torno a la construcción de sociedades inclusivas y prósperas que beneficien a la mayoría.



6. Eliminación del uso de violencia como mecanismo de negociación entre actores sociales y políticos

La seguridad ciudadana se establece como resultado esencial del desarrollo, reforzando la prevención y disminución de la inseguridad y la violencia de manera integral. Se elimina el uso de la violencia o la amenaza de violencia como mecanismo de negociación entre actores sociales y políticos.



7. La ley y el acceso a la justicia con igualdad para toda la ciudadanía

La ley y el acceso a la justicia es igual para toda la ciudadanía, sin fueros ni privilegios y se aplica imparcialmente con equidad y justicia. Se fortalecen las instituciones garantes de la justicia y la promoción de los derechos humanos.



8. La equidad intergeneracional y sostenibilidad ambiental como objetivos prioritarios

La sostenibilidad (económica, social y ambiental) se establece como el objetivo último de la gobernanza para el desarrollo.

Proposiciones para atender la COVID-19 como una crisis de gobernanza

El consenso de las consultas realizadas es doble. Por una parte, se concluyó que estamos frente a una oportunidad. Por otra, se concluyó que, si salimos de esta pandemia sin haber establecido parámetros claros que fortalezcan la gobernanza efectiva, habremos desperdiciado una oportunidad. Éstas se esbozan en al menos tres grandes áreas de atención:

- » Oportunidades para cambios en el ámbito de las políticas públicas
- » Oportunidades para cambios en las reglas de juego
- » Oportunidades para cambios en los actores que participan en la arena de la política

La magnitud multidimensional de la crisis de gobernanza actual exige una conversación sobre la necesidad de adaptar las “reglas de juego” que norman el diseño y la implementación de las políticas públicas de desarrollo humano. La recuperación y reconstrucción del tejido social y productividad económica equitativa se basarán en los acuerdos políticos y los procesos de gobernanza que sean puestos en marcha. El resultado será proporcional a acuerdos políticos y procesos permanentes que generen oportunidades y permitan el acceso a formas justas e inclusivas de productividad social y económica.

La pandemia de la COVID-19 visibiliza una crisis de gobernanza que es también, potencialmente, una oportunidad excepcional de forjar nuevos acuerdos entre gobierno, sector privado, sociedad civil y comunidades. Estos acuerdos se deben construir sobre las soluciones e instalar la necesidad de establecer una dinámica recurrente de búsqueda de soluciones que produzcan legitimidad de proceso y resultados. La pandemia ha evidenciado vulnerabilidades del marco institucional vigente y ha expuesto desigualdades y déficits estructurales que deben atenderse.

Mientras las sociedades emergen de las consecuencias inmediatas de la crisis, debemos aspirar a más que correcciones marginales de respuesta y apuntar a una recuperación sostenible. Se puede construir un mejor sistema de salud y más fuerte, una economía más resiliente y equitativa que genera oportunidades e igualdad de acceso a estas oportunidades para la próxima década.

Para poder realizar esta oportunidad, hemos identificado algunos imperativos sobre cómo plantear esta nueva normalidad mejorada:



» **Proposición 1. Adaptando las reglas de juego:**

Las desigualdades expuestas por la pandemia son producto de déficits estructurales que perpetúan privilegios y asimetrías en capacidad de influencia. Se requiere de cambios de políticas y de legislación que corrija estos déficits.

Un plan inclusivo de reconstrucción para América Latina y el Caribe centrado en la Agenda 2030 y principalmente el Objetivo de Desarrollo Sostenible 16 sobre paz, justicia e instituciones inclusivas. Esto será clave para posicionar los principios de gobernabilidad para la región por medio de la traducción de consensos en puntos de agenda programática hacia el 2030 con enfoque de desarrollo sostenible, recuperación socioeconómica, sistemas de protección social robustos, sistemas de justicia transparentes y eficientes, y que habilite oportunidades de convivencia pacífica en la región más violenta y conflictiva del mundo.

Las reglas de juego se deben afinar sentando a los sectores en la mesa y acercando conocimiento y experiencia internacional, basado en evidencia sólida. El PNUD tiene un capital en estos procesos que puede poner a disposición incluyendo sus herramientas y metodologías, así como presencia en los países. Se requiere reforzar procesos de diálogo y generación de consensos, innovación en la inclusión de actores tanto en los procesos de diálogo, como en los procesos continuos de recuperación y la participación inclusiva que potencia el aumento de conocimiento por parte de la ciudadanía.

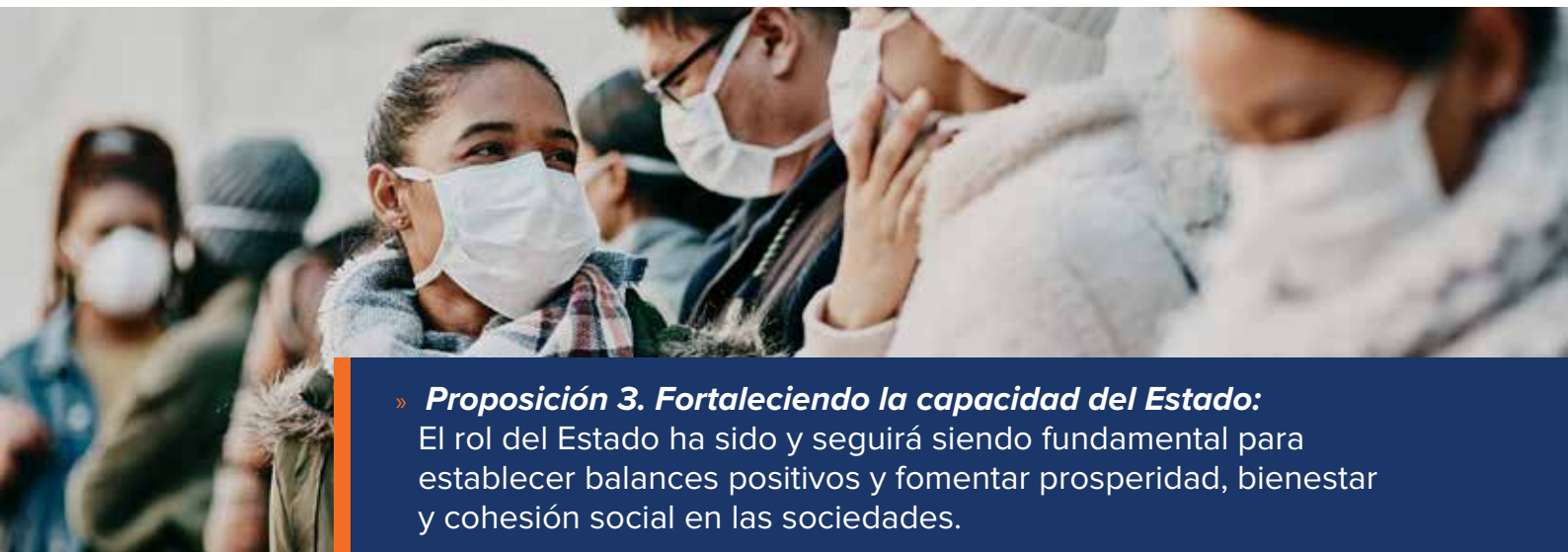
Institucionalidad para lograr la cohesión social acompañada de resiliencia digital e innovación. Sin una institucionalidad transformada no habrá paz ni desarrollo sostenible. Los servicios públicos de calidad centrados en las personas requieren de transformaciones institucionales innovadoras para acercar los servicios y digitalización de los procesos. Es necesario complementar estas transformaciones con la reducción de la brecha digital que es reflejo de las desigualdades estructurales. Esto permitirá recuperar la confianza entre ciudadanía y gobiernos y el fortalecimiento del estado de derecho y de la protección social.



» **Proposición 2. Formulando pactos fiscales justos y solidarios que permiten gastos sostenibles, inclusivos y amigables al crecimiento económico:** La crisis económica y de producción ocasionada por la pandemia y la respectiva recesión económica está reduciendo la capacidad de ingreso de los gobiernos poniendo en riesgo su capacidad de respuesta y soluciones.

Los planes para la reconstrucción de la región deben abordar la fiscalidad regional con participación y alianza de actores estratégicos. Esto requiere un amplio componente coordinador, y la priorización de temas de recuperación financiera, plan de protección social, reforzamiento de sistemas de salud, comercio interregional como fuentes de crecimiento futuro y un plan de inversión que aborde la conectividad digital e innovación.

Lanzar un programa de investigación sobre la economía política de las reformas fiscales. Ante el cambio acelerado de aumento de necesidades de protección social existe la necesidad de una mejor comprensión de las condiciones sociales y políticas necesarias para la promoción de pactos fiscales basados en coaliciones amplias. El PNUD se encuentra en una posición privilegiada para construir puentes entre el mundo académico y las instituciones del Estado con respecto a construir una agenda sobre la economía política de la recuperación.

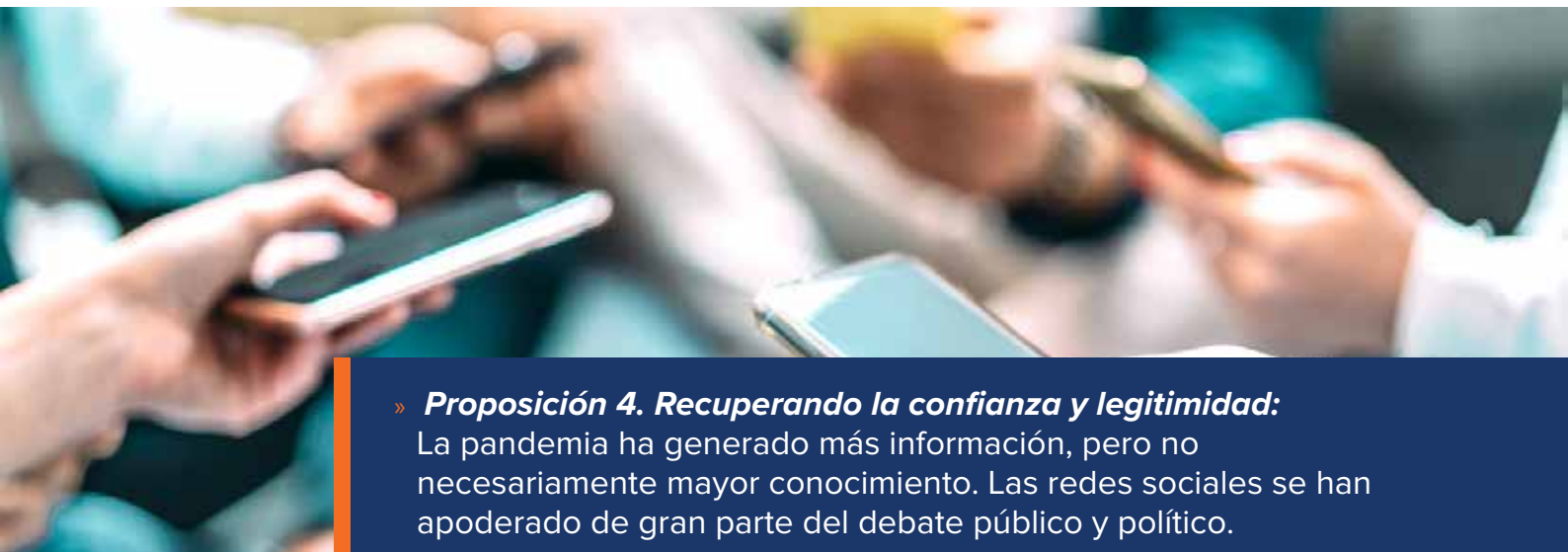


» **Proposición 3. Fortaleciendo la capacidad del Estado:**
El rol del Estado ha sido y seguirá siendo fundamental para establecer balances positivos y fomentar prosperidad, bienestar y cohesión social en las sociedades.

Redefinición del rol del estado en la prestación de servicios públicos, a partir de reafirmar la universalidad del acceso. Esto incluye programación dirigida a fortalecer la capacidad de adaptación de las instituciones públicas incluyendo mejoras en los tiempos de respuesta, mecanismos de decisión y mecanismos de seguimiento de expectativas de la ciudadanía. Esta programación se extiende también a apoyar procesos de transformación de los órganos de control (Defensorías, Contralorías, Procuradurías, entre otros), así como los parlamentos sobre la base de la importancia de la robustez de los contrapesos.

COVID-19 y sus medidas de distanciamiento social han expuesto nuevos desafíos de gestión pública. La responsabilidad de responder a la pandemia depende en gran medida del Estado, que como institución, enfrenta una crisis de legitimidad y de confianza. Pero la ciudadanía ahora espera que el Estado brinde servicios de salud, alivio, protección e incluso comodidad en este momento de incertidumbre. El Estado también se enfrenta a los peligros de la desinformación y las “noticias falsas” en mayor proporción. En las fases de recuperación posteriores a la pandemia, el Estado tendrá nuevamente la tarea de “reconstruir mejor” en la jerga de las operaciones de recuperación. Esto significa que el Estado deberá fortalecerse para que sea más adaptable, para lograr transformaciones institucionales y para la transición de proveer respuestas analógicas hacia soluciones digitales.

El Estado y las instituciones públicas necesitan responder con niveles más altos de eficiencia en la provisión de servicios públicos (con mayor transparencia y co-creación para recuperar la confianza y la legitimidad de la ciudadanía). Durante la pandemia, el sistema de salud público ha tenido todo el peso de la respuesta, pero también las instituciones públicas para garantizar que se mantenga la ley y el orden y prevalezca el estado de derecho. En los períodos posteriores a la pandemia, será un gran desafío restablecer la funcionalidad central del gobierno y el fortalecimiento de la provisión de servicios públicos, incluidas la administración y la justicia.



» **Proposición 4. Recuperando la confianza y legitimidad:**

La pandemia ha generado más información, pero no necesariamente mayor conocimiento. Las redes sociales se han apoderado de gran parte del debate público y político.

Promover modalidades innovadoras de participación ciudadana con énfasis en las metodologías de democracia representativa. Esto por medio de la aplicación de metodologías de democracia deliberativa que pueden jugar un rol importante en complementar y fortalecer el trabajo de las instituciones de democracia representativa.

Aprovechar las oportunidades que ofrece la tecnología para promover cambios en el rol del Estado, donde las personas sean el centro de las políticas públicas. La innovación y tecnología pueden ser un habilitador de mecanismos de transparencia activa, rendición de cuentas, mejor procesamiento y uso de datos, para establecer nuevos mecanismos de participación y democracia deliberativa y promover avances a políticas de gobierno abierto. Un aspecto fundamental es asegurar que los distintos grupos sociales tengan acceso a las tecnologías (que nadie se quede atrás) pero se requiere también la educación acerca de lo que estas tecnologías les van a permitir.

Está a punto de comenzar una nueva normalidad y el Estado para fortalecer su legitimidad, debe estar preparado con estrategias efectivas de gobernabilidad. El enfoque del PNUD para enfrentar COVID-19 ha sido triple. Se trata de preparación, respuesta y recuperación. La gobernabilidad tiene un papel clave que desempeñar en estas tres etapas. Forjar acuerdos entre los actores para preparar, implementar planes de respuesta y estrategias que sean inclusivos y estén bajo el eje del estado de derecho. Pero lo más importante es que, para garantizar que los acuerdos consideren una recuperación que garantice que las instituciones sigan funcionando, la asistencia de socorro llegue a donde más se necesite y se pueda fortalecer la paz y la cohesión social.



» **Proposición 5. Logrando igualdad de acceso a capacidades y oportunidades:** La sostenibilidad de la recuperación requiere de reconstruir tejidos sociales y productivos de manera equitativa y eficientes.

COVID-19 está exponiendo desigualdades en nuevas dimensiones. Si bien el virus ha afectado a todos y todas, independientemente de raza, etnia, género u origen; las consecuencias económicas y sociales de su impacto no son igualitarias, ya que son diferentes y más severas para los más vulnerables. La resiliencia necesita un nuevo nombre, ya que estamos a punto de comenzar una recesión, traerá de vuelta a la gente a la pobreza y aumentará la desconfianza de la ciudadanía (una mezcla explosiva).

Generar métricas de avance social, para monitorear avances y desafíos, con foco en recuperar la legitimidad de las políticas en un marco democrático. Fortalecer las capacidades de los Estados para la producción, uso y difusión de datos puede contribuir a una mayor participación e incremento de la confianza ciudadana. El manejo de la información es clave para las políticas públicas; para que la ciudadanía se involucre es necesario compartir los datos; los datos deben ser compartidos con la ciudadanía para fortalecer la confianza. La academia, centros de pensamiento y sector privado pueden apoyar en el análisis de información, en temas de transparencia y rendición de cuentas que abonen en la legitimidad.

Para las economías de ingresos medios, que luchan por convertirse en sociedades de clase media, como las de América Latina y el Caribe, la gobernabilidad resulta ser el instrumento más relevante para la recuperación. Esto significa la creación de oportunidades para que las personas forjen sus destinos y colaboren. La gobernabilidad es el proceso mediante el cual se generan oportunidades (su aplicación está vinculada a la práctica de la democracia, así como a los derechos políticos y civiles que conducen al desarrollo sostenible).

Oferta programática Gobernanza Efectiva actualizada hacia el 2030

A fin de contribuir con las sociedades al logro de la gobernanza efectiva necesaria, en el marco de los ocho principios orientadores y cinco proposiciones arriba planteados, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, entendiendo que es impostergable la construcción de un nuevo Pacto Social, actualiza su oferta programática y pone al servicio de la región:

- » Su experiencia probada como convocante y facilitador de esfuerzos de diálogo y concertación tendientes a la búsqueda de los acuerdos que requiere la gobernanza efectiva.
- » Metodologías de respuesta rápida, adecuadas a la realidad de cada país, que generen recomendaciones y rutas a seguir en materia de políticas públicas de desarrollo.
- » La oferta de conocimiento producida por la organización en los diversos aspectos del desarrollo que incluye, pero no se limita, a los Informes de Desarrollo Humano globales, regionales y nacionales.
- » Un equipo de trabajo experimentado con capacidad de respuesta de calidad en tiempo real.
- » Organismo dispuesto a trabajar a nivel nacional.

El PNUD debe consolidarse así como un instrumento efectivo de los Estados miembros del sistema de Naciones Unidas para alcanzar los objetivos de desarrollo alineados con los ODS y definidos por sus procesos soberanos. El PNUD es también la agencia de desarrollo con mayor presencia en territorio a nivel mundial. Es una agencia que ofrece soluciones locales a problemas complejos con contenido y calidad global.



Participantes del proceso de consultas Gobernanza Efectiva, más allá de la recuperación.

El Buró Regional para América Latina y el Caribe del PNUD desea expresar agradecimiento a las siguientes personas por su participación y colaboración en las consultas de gobernabilidad que se realizaron entre los meses de septiembre y noviembre del 2020 (ordenadas alfabéticamente por nombre). En total se contó con la participación de cerca de ochenta expertos y expertas de alto prestigio provenientes de 26 países de la región. Las consultas, como este documento sintetiza, han permitido confirmar que las consecuencias de la pandemia de la COVID-19 son de tal profundidad, que necesitamos redoblar esfuerzos y renovar el enfoque de gobernabilidad efectiva.

Adrian Saunders	Presidente Corte de Justicia del Caribe
Álvaro García Hurtado	Ex Ministro de Economía, Chile
Ana María Currea	Jefe de Comunicaciones, PNUD América Latina y el Caribe
Andrés Rebolledo	Economista y Ex Ministro de Energía, Chile
Anthony Clayton	Alcan Profesor de Desarrollo Sostenible del Caribe en la Universidad de las Indias Occidentales
Anthony Phillips-Spencer	Embajador de la República de Trinidad y Tobago en los Estados Unidos de América.
Carlos Santiso	Director de la Dirección de Innovación Digital en Gobierno de la CAF
Carlos Scartascini	Jefe, Grupo de Investigación para el Desarrollo del BID
Catalina Pérez Salinas	Diputada, Chile
Claudia Palacios	Periodista, presentadora de noticias en CM& Televisión
Compton Bourne	Profesor emérito de la Universidad de las Indias Occidentales y Miembro del Panel de Selección de Personas Eminentes de los Premios del Caribe por la excelencia Anthony N. Sabga
Daniel Titelman	Jefe División Económica CEPAL
Daniel Zovatto	Director Regional para ALC de IDEA Internacional
Diego García-Sayán	Relator especial sobre la independencia de jueces y abogados, ACNUDH
Diego Zavaleta	Asesor de Estrategia y Alianzas, PNUD América Latina y el Caribe
Edmundo Jarquín	Ex Candidato presidencial, Nicaragua
Elena López Ruf	Directora CREAS
Elizabeth Solomon	Directora Ejecutiva del Centro Caribeño de Derechos Humanos
Epsy Campbell	Primer Vicepresidenta Costa Rica
Érica Rodríguez	Profesora UCM, coord. América Latina en F. Alternativas, y consultora internacional.
Farah Urrutia	Secretaría de Acceso a Derecho y Equidad, OEA
Fernando Henrique Cardoso	Ex Presidente Brasil
Francisco Rodríguez	Director y fundador de la Fundación Petróleo por Venezuela
Gabriel Boric	Diputado, Chile
Gabriel Silva	Diputado, Panamá
Hernando Gómez Buendía	Académico, periodista y activista político colombiano, Director y Editor General de la revista Razón Pública
Hugo Wood	Global Shaper, Foro Económico Mundial
Ignacio Gaitán	Presidente de iNNpulsa Colombia

Isabel Saint Malo	Asesora Senior PNUD y ex Vicepresidenta de Panamá
Iván Ormachea	Facilitador del Programa del Diálogo Democrático del PNUD
Jairo Acuña-Alfaro	Líder del Equipo de Gobernabilidad para América Latina y el Caribe del PNUD
Jessica Byron-Reid	Director del Instituto de Relaciones Internacionales
Jimmy Fletcher	Ex Ministro de Servicios Públicos, Información, Radiodifusión, Desarrollo Sostenible, Energía, Ciencia y Tecnología, Santa Lucía
Jorge Castañeda	Ex Secretario de Relaciones Exteriores, México
Jorge Marirrodiga	Periodista, El País
José Antonio Alonso Rodríguez	Catedrático de Economía Aplicada, Universidad Complutense de Madrid
José Antonio Ocampo	Director de la Concentración de Desarrollo Económico y Político de la Universidad de Columbia
José Antonio Sanahuja	Director de la Fundación Carolina. Catedrático de la UCM
José Cruz-Osorio	Gerente del Centro Regional para América Latina y el Caribe del PNUD
José Luis Rodríguez Zapatero	Ex Presidente de España
Juan Camilo Cárdenas	Profesor Titular Universidad de los Andes.
Kevin Casas	Secretario General de IDEA Internacional
Laura Chinchilla	Ex Presidenta de Costa Rica
Leopoldo Ferguson	Profesor Asociado Universidad de los Andes
Lucia Dammert	Profesora asociada en la universidad de Santiago Chile
Luis Felipe Lopez-Calva	Subsecretario General de la PNUD y Director Regional para América Latina y el Caribe, PNUD
María Pinedo Manrique	Analista tendencias, América Latina y el Caribe, PNUD
Ma. Herminia Tavares de Almeida	Profesora, Universidad de Sao Pablo
Margarita Cedeño	Ex Vicepresidenta República Dominicana
María Eugenia Brizuela de Ávila	Ex Ministra de Asuntos Exteriores, El Salvador
María Fernanda Carrascal	Activista. Creadora del País Primero. Asesora legislativa
María Fernanda Espinosa	Ex Presidenta de la Asamblea General de las Naciones Unidas para el 73° período de sesiones
María Luisa Romero	Ex Ministra de Gobierno y ex Viceministra de Gobierno, Panamá
Marisol Argueta	Jefe de la Agenda Regional, América Latina Foro Económico Mundial
Marla Dukharan	Economista en Jefe, Bitt Inc. Barbados
Max Hernández	Secretario ejecutivo del Acuerdo Nacional, Perú
Max Trejo Cervantes	Secretario General, Organismo Iberoamericano de Juventud (OIJ)
Michelle Muschett	Investigadora Centro de investigación y políticas económicas del Departamento de Desarrollo Internacional de Oxford
Min Chen	Co-Cofundadora & CEO of Wisy, emprendedora tecnología
Mónica Pachón	Profesora, Universidad de los Andes
Nicolás Eyzaguirre Guzmán	Ex Ministro de Finanzas, Chile
Nikoli Jean-Paul Edwards	Activista por la reforma e implementación de políticas sociales y de juventud
Nora Lustig	Profesora Samuel Z. Stone Departamento de Economía de la Universidad de Tulane
Pablo Ruiz-Hiebra	Asesor Gobernabilidad, PNUD
Paola del Carpio Ponce	Red de Estudios para el Desarrollo (Redes)
Paolina C. Medina	Profesor asistente de finanzas, Escuela de Negocios Mays Universidad Texas A & M. Behavioral insights
Paula Altavilla	Directora para la Región Sur en Whirlpool Latinoamérica
Quacy A. Grant	Presidente, Consejo Nacional de la Juventud de Guyana
Rebeca Grynspan	Secretaría General SEGIB

Ricardo Fuentes Nieva	Ex Director ejecutivo de Oxfam México.
Ricardo Lagos	Ex Presidente Chile
Rosario Córdoba	Presidente, Consejo Privado de Competitividad, Colombia
Sabine Manigat	Politóloga de la Universidad Quisqueya
Santiago Levy Algazi	Investigador senior no residente del Programa de Desarrollo y Economía Global de Brookings
Santiago Peña Palacios	Ex Ministro de Finanzas, Paraguay
Sergio Fausto	Superintendente ejecutivo de la Fundación Instituto Fernando Henrique Cardoso
Sir Hillary Beckles	Vicerrector de la Universidad de las Indias Occidentales
Susana Malcorra	Decana Escuela Asuntos Globales IE
Troy Thomas	Director de Investigación de Pregrado en la Universidad de Guyana
Vanessa Rubio Márquez	Senadora de la LXIV Legislatura del Congreso de México
Vicki Assevero	Abogada internacional con interés en el desarrollo sostenible
Waldo Gutiérrez Iriarte	Ex Ministro de Hacienda, Bolivia
Walton Alfonso Webson	Embajador de Antigua y Barbuda ante las Naciones Unidas
Xavier Saez-Llorens	Catedrático de Pediatría, Jefe del Departamento de Enfermedades Infecciosas y Director de Investigación Clínica del Hospital del Niño
Yolanda Mayora	Gerente de Sostenibilidad Corporativa, AGEXPORT

*Adicional a estas consultas, se contó con la colaboración y retroalimentación de una serie adicional de conversaciones de retroalimentación, incluyendo reuniones informativas con las y los Representantes Residentes del PNUD en América Latina y el Caribe; el liderazgo del área de gobernabilidad, prevención de conflictos y estado de derecho del PNUD en Nueva York; retroalimentación de un grupo selecto de periodistas regionales y el grupo de expertas y expertos en diálogo y mediación de la “Red Públicos y Comunitarios LATAM”.



www.latinamerica.undp.org